Santiago, catorce de julio de dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante oficio sin número, de fecha 2 de octubre del año 2008 -recepionado en esta Magistratura el día 6 del mismo mes y año-, el señor Luis Francisco Avilés Mellado, Juez Titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, remitió el Auto Motivado de igual fecha, recaído en la causa RIT 7200-2008, RUC 0810019079-7, en la que son intervinientes la Corporación del Cobre de Chile, en lo sucesivo Codelco Chile, como denunciante, y Chilevisión S.A., en calidad de denunciado.

Se señala en el mencionado Auto Motivado que se requiere a este Tribunal Constitucional *"para que se pronuncie sobre la inaplicabilidad"* de los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.733, por su *"posible contravención a la Constitución, fundamentalmente de sus artículos 19, N° 3, y 83"*.

Las normas legales impugnadas disponen:

"Artículo 24.- El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

- a) La denuncia deberá señalar claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran y adjuntar los medios de prueba que los acrediten, en su caso.*
- b) El tribunal dispondrá que ésta sea notificada de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.*
- c) El denunciado deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que se funda. De no disponer de ellos, expresará esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba ofrecida y no acompañada.*
- d) La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo a que se refiere la letra anterior, sea que el denunciado haya o no presentado descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.*

e) *Las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.*

f) *La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.*

Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones. Esta resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría del tribunal."

"Artículo 27.- El procedimiento -tratándose de las infracciones al Título IV- se sujetará a las normas establecidas en el artículo 24, con las siguientes modificaciones:

a) *El plazo para presentar los descargos será de tres días hábiles, y*

b) *No habrá término especial de prueba."*

I. HECHOS DE LA CAUSA SUBLITE.

El magistrado que ha planteado la cuestión de constitucionalidad indica que, con fecha 11 de septiembre del año 2008, Codelco Chile presentó denuncia por incumplimiento de la aludida ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en contra del canal de televisión abierta N° 11, Chilevisión S.A., y que en ella la denunciante hace alusión a los hechos siguientes:

a) En el programa "En la Mira", transmitido el lunes 18 de agosto de 2008, a las 22:00 horas, se habrían cometido errores, omisiones y, además, emitido declaraciones infundadas y temerarias;

b) La Empresa Codelco Chile envió una carta de protesta al Director Ejecutivo de Chilevisión S. A. Luego de considerar insatisfactoria la respuesta dada a esta expresión de disconformidad, en ejercicio de los derechos que confieren el artículo 19, N° 12, de la Constitución y 16 y siguientes de la Ley N° 19.733, con fecha 5 de

septiembre del mismo año la denunciante solicitó al Director Ejecutivo de Chilevisión S.A., mediante carta notificada por Notario Público, la aclaración y rectificación de ocho puntos que, específicamente, se detallaron en la referida comunicación;

c) Con fecha 8 de septiembre de 2008, la conductora del aludido programa, señora Macarena Pizarro, mencionó la recepción, por parte de Chilevisión, de la carta de Codelco-Chile, advirtiéndole que, a pesar de que las materias abordadas en el respectivo espacio periodístico habrían sido tratadas con claridad, en tal oportunidad se iban a abordar los puntos de interés para la empresa estatal, con el objeto de contribuir a una mejor comprensión de la materia;

d) De la simple lectura del requerimiento de aclaración y de la transcripción de esta última se desprende que el canal no cumplió con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.733, pues las rectificaciones o aclaraciones emitidas por Chilevisión fueron glosadas en forma sesgada, de modo de persistir en los errores, omisiones o declaraciones ofensivas para Codelco y sus personeros. Se omitió difundir íntegramente la aclaración y rectificación a que se refieren los puntos 1, 5, 7 y 9 del requerimiento de Codelco-Chile y, en lo demás, se hizo un comentario general, o bien se soslayó la aclaración y rectificación, no habiéndose en ninguno de ellos difundido la aclaración y rectificación en los términos que ordena la ley;

e) Atendido lo anterior, la denunciante considera que el aludido canal de televisión no habría dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 19.733, ya

que una aclaración o rectificación condicionada, deformada y comentada se desnaturaliza y produce exactamente el efecto contrario al previsto en la ley, dejando de ser una aclaración para transformarse en la prolongación del programa ofensivo. La aclaración fue incompleta y viciada y, por lo tanto, inexistente para los efectos legales;

f) La denunciante pide en su presentación ante el tribunal que, atendido lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 19.733, tenga por interpuesta denuncia de aclaración o rectificación en contra del director de Canal 11 de televisión abierta y, en definitiva, ordene las aclaraciones y rectificaciones solicitadas por su parte en las condiciones y forma previstas en la misma legislación, difundiéndola íntegramente, condenándolo además al pago del máximo de la multa establecida en el artículo 28 de la citada ley.

II. CONSIDERACIONES DE DERECHO PLANTEADAS POR EL MAGISTRADO QUE HA PLANTEADO LA CUESTION DE CONSTITUCIONALIDAD.

En síntesis, ellas son las que se enuncian a continuación:

- a) Que existe gestión pendiente, constituida por la denuncia para hacer efectivas las responsabilidades penales contempladas en la Ley N° 19.733, carácter penal que aparece no sólo porque el propio denunciante lo indica, sino porque una de las posibles sanciones es la multa;
- b) Se encuentra vigente y es aplicable el título V, párrafo 2, de la Ley N° 19.733, pues si bien el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, al definir la competencia de los jueces de

garantía, hace alusión a la ley de responsabilidad juvenil y mayoritariamente a la ley procesal penal, esto es, el Código Procesal Penal, por el principio de que debe preferirse la ley posterior - la entrada en vigencia de la Ley N° 19.733 es posterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal- y, además, por el principio de especialidad, debe preferirse la aplicación de la Ley N° 19.733;

- c) Específicamente, en el Considerando 5° del Auto Motivado, el requirente manifiesta que, a su juicio, la aplicación de los artículos 24 y 27 de la referida ley resulta contraria al artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental.

Señala que, más allá de tratarse de una cuestión ajena a los artículos 55 y 400 del Código Procesal Penal y, por ende y en principio, a la necesidad de participación del Ministerio Público, según lo prevé el artículo 83 de la Constitución, lo cierto es que se está frente a un procedimiento que, por sus características, no se enmarca en las exigencias que impone aquélla.

Explicando su argumentación, hace notar que las disposiciones legales impugnadas no contemplan un acto de imputación formal a modo de acusación, requerimiento o querrela, en términos similares a los previstos en el artículo 400 del Código Procesal Penal, lo que permitiría, entre otras cosas, ejercer mejor el derecho a defensa.

En segundo lugar, señala que el denunciado no cuenta con un término especial de prueba para llevar adelante sus descargos, lo que se agudiza desde el momento en que

éstos deben presentarse dentro de tercero día luego de haber sido notificado por cédula. Señala, a continuación, que si se efectúa una comparación con los procedimientos que ordena cumplir el artículo 1º del Código Procesal Penal, para la generalidad de los delitos, siempre habrá audiencias orales, públicas y contradictorias, no sólo en relación con el juicio, sino que también con la finalidad de discutir previamente los elementos de prueba de cargos.

Por último, estima que los artículos cuestionados serían también contrarios a lo dispuesto en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos y, en términos similares, al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preceptos que, entre las garantías vinculadas al proceso, reconocen que debe darse al imputado el tiempo y los medios adecuados para su defensa, cuestión que, como se indicó, no sería efectiva en el caso de la legislación que se pide inaplicar en este caso.

Atendidos los argumentos expuestos, el juez requirente solicita a esta Magistratura pronunciarse sobre la inaplicabilidad de los preceptos impugnados por contravenir lo dispuesto en los artículos 19, Nº 3, y 83 de la Carta Fundamental.

III. ADMISIÓN, TRASLADO Y OBSERVACIONES DE LAS PARTES.

Con fecha 21 de octubre del año 2008, la Primera Sala del Tribunal declaró admisible la acción deducida, ordenando la suspensión del procedimiento en el que incide. Pasados los autos al Pleno, se dio conocimiento del requerimiento a los órganos constitucionales interesados y a las partes del proceso *sub lite* para que

podrían formular las observaciones que estimasen necesarias y convenientes.

Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2008 - fojas 78 a 80-, Codelco-Chile, representada por el abogado Pablo Arteaga Rodríguez, pidió a este Tribunal Constitucional tener presente que, en su opinión y difiriendo de lo expresado por el Magistrado del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, el procedimiento contemplado en los artículos 24 y 27 de la Ley Nº 19.733 daría satisfacción a la garantía del debido proceso reconocida en el inciso quinto del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política. Fundamenta esta aseveración argumentado que, si bien se encuentran constreñidas por la naturaleza de la acción, las exigencias de "un tribunal imparcial, la bilateralidad proporcional de la audiencia, el derecho a rendir prueba, a ser escuchado en defensa propia, y una doble instancia" son contempladas en el procedimiento aludido. Agrega que "una adecuada tutela del derecho a réplica" exige una tramitación rápida, tendiente a determinar con celeridad si tal derecho asiste o no a la actora, pues una difusión tardía de la réplica hace ilusorio el derecho por cuanto lo descontextualiza, impidiendo la verdadera defensa mediática que se pretende concretar por medio de esta institución.

A continuación, precisa que, por lo anteriormente argumentado, la prueba a rendir por la actora se circunscribe a su primera presentación, pues se busca que la acción se ejerza de un modo tan riguroso y estricto que se baste a sí misma para acreditar los hechos que se alegan. Hace notar que, en este caso concreto, acompañó

al proceso la transcripción y una copia en DVD del programa transmitido por el canal de televisión denunciado, probando así, irrefutablemente, el hecho de la transmisión del programa y su contenido; la carta notificada al mismo denunciado por Notario Público, en que se exige el ejercicio de su derecho a réplica y, también, un video, en formato DVD, que registra "los segundos" que esta última habría dedicado "supuestamente a satisfacer los requerimientos de ese derecho".

Expone que, atendidas las probanzas recién descritas, las únicas evidencias que podrían rendirse para impugnarlas por el canal de televisión denunciado, serían las que le sirvieran a los efectos de acreditar la falsedad de los aludidos antecedentes. Si así no fuera, continúa, el juez tendría antecedentes suficientes para fallar sobre si hubo o no infracción de Chilevisión al deber de otorgar el derecho a réplica a Codelco Chile, sin que se requiera de más diligencias para aclarar los hechos. Desde tal perspectiva, el término de prueba contemplado en la legislación especial que se impugna resultaría suficiente para satisfacer los requerimientos del debido proceso, asegurado en la Carta Fundamental.

Por otra parte, indica que una adecuada interpretación de los artículos reprochados lleva a concluir que la ampliación de cinco días del término probatorio procede de igual forma en el caso en cuestión, ya que el artículo 24 de la Ley N° 19.733 sólo exige expresar que no se dispone de los medios de prueba, sin necesidad de justificar tal circunstancia, ni probar entorpecimiento alguno, atendido que tal ampliación no constituye un término probatorio especial.

Codelco-Chile termina su presentación haciendo presente que el procedimiento, limitado al período de discusión y de prueba que contempla la Ley N° 19.733, no sería un caso aislado y, para confirmar dicha afirmación, cita a título ejemplar los procedimientos sumarísimos previstos en el Código de Minería, los juicios sobre servidumbres y los contemplados para las acciones constitucionales de protección y de amparo, haciendo hincapié que en estos últimos, incluso, puede prescindirse de la prueba.

El abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de Red de Televisión Chilevisión S.A., en escrito de fecha 18 de noviembre de 2008, formuló las siguientes observaciones respecto del requerimiento de inaplicabilidad deducido, mismo que pide sea acogido:

En primer término, hizo presente que bajo el Título IV de la Ley N° 19.733 se contemplan diversas reglas de procedimiento que tienden a *"hacer efectivas las responsabilidades por infracción a las normas relativas al derecho de aclaración y de rectificación del ofendido o injustamente aludido por algún medio de comunicación social"*. Agrega que coincide con el juez requirente en cuanto a que la responsabilidad de que trata tal normativa es de naturaleza penal, no sólo en consideración al juez competente en esta materia, sino que, además, pues una de las sanciones que puede ser aplicada es la multa.

Precisa que si bien la multa también es una sanción propia del derecho administrativo, un criterio para diferenciarla en este caso es la procedencia del proceso penal. Añade que *"la necesidad racional de la aplicación*

de la multa al director ejecutivo de un medio de comunicación social, por infracción al título IV de la ley de prensa", obliga a exigir que se contemple un procedimiento en el que rijan las garantías para su adecuada defensa, como asimismo se cumplan las condiciones mínimas que deben concurrir en todo proceso penal, las cuales no se verifican en la especie.

Hace presente al respecto que la aplicación de las normas legales impugnadas puede contravenir el derecho a defensa previsto en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución, en el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derecho que, según afirma, consiste en *"la facultad del imputado de intervenir en el proceso penal que se dirige en su contra, para poner en evidencia ya sea la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe"*.

Agrega que los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal establecen, en relación con tal derecho, una serie de garantías que tampoco serían resguardadas por la legislación que se pide inaplicar en este caso, como serían los derechos de información, a ser asistido por un abogado, a solicitar de los fiscales diligencias de investigación, a guardar silencio y a pedir al juez que cite a una audiencia para prestar declaración, entre otros.

A mayor abundamiento, manifiesta que las normas impugnadas, en su aplicación al caso concreto, podrían igualmente vulnerar el principio del debido proceso

penal, asegurado a todas las personas en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Constitución.

Expone en este punto que los preceptos reprochados carecen de los elementos mínimos que deben concurrir conforme al principio del debido proceso, pues no existe la posibilidad de rendir pruebas que desacrediten el mérito de la querrela o denuncia en un tiempo razonable, como tampoco se contempla audiencia para el afectado ni la publicidad de lo actuado en estrados.

Indica que, en suma, el procedimiento contemplado para estos casos no tendría un "real carácter contradictorio", por cuanto tampoco se prevé, según se expresa, una "igualdad de armas entre el acto de imputación -en este caso la denuncia- y los descargos del denunciado, especialmente respecto de la diferencia de los plazos para la rendición de prueba entre las partes".

Habiéndose traído los autos en relación, el día 15 de enero de dos mil nueve se procedió a la vista de la causa, oyéndose el alegato del abogado señor Samuel Donoso Boassi, por Red de Televisión Chilevisión S.A.

CONSIDERANDO:

I. VICIOS DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS.

PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución Política de la República dispone que es atribución del Tribunal Constitucional *"resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución"*;

SEGUNDO: Que la misma norma constitucional expresa, en su inciso undécimo, que en este caso, *“la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto”* y agrega que *“corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley”*;

TERCERO: Que, de este modo, para que prospere la acción de inaplicabilidad es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) que se acredite la existencia de una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial; b) que la solicitud sea formulada por una de las partes o por el juez que conoce del asunto; c) que la aplicación del precepto legal en cuestión pueda resultar decisiva en la resolución de un asunto y sea contraria a la Constitución; d) que la impugnación esté fundada razonablemente; y e) que se cumplan los demás requisitos legales;

CUARTO: Que, en relación al primer requisito, en el caso de autos se solicita la inaplicabilidad de diversos preceptos legales en la gestión judicial constituida por la denuncia de incumplimiento de la Ley N° 19.733, interpuesta por la empresa Codelco-Chile en contra del canal de televisión abierta número 11, Chilevisión S.A., y sustanciada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Causa RIT 7200-2008, RUC 0810019079-7, por lo que existe

gestión pendiente que se sigue ante un tribunal ordinario o especial;

QUINTO: Que, en relación al segundo requisito, en este caso, la inaplicabilidad se ha promovido a instancia del juez que conoce de la referida gestión judicial;

SEXTO: Que, en el caso de autos, se impugnan los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.733, sobre las Libertades de Opinión e Información y el Ejercicio del Periodismo, cuyos textos rezan de la manera que sigue:

"Artículo 24.- El procedimiento se sujetará a las reglas siguientes:

- a) *La denuncia deberá señalar claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran y adjuntar los medios de prueba que los acrediten, en su caso.*
- b) *El tribunal dispondrá que ésta sea notificada de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 18. En igual forma se notificará la sentencia que se dicte.*
- c) *El denunciado deberá presentar sus descargos dentro de quinto día hábil y adjuntar los medios de prueba que acrediten los hechos en que se funda. De no disponer de ellos, expresará esta circunstancia y el tribunal fijará una audiencia, para dentro de quinto día hábil, a fin de recibir la prueba ofrecida y no acompañada.*
- d) *La sentencia definitiva se dictará dentro de tercero día de vencido el plazo a que se refiere la letra anterior, sea que el denunciado haya o no presentado descargos. Si el tribunal decretó una audiencia de prueba, este plazo correrá una vez vencido el plazo fijado para ésta.*
- e) *Las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario.*
- f) *La sentencia definitiva será apelable en ambos efectos. El recurso deberá interponerse en el término fatal de cinco días, contados desde la notificación de la parte que lo entabla, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan.*

Deducida la apelación, el tribunal elevará de inmediato los autos a la Corte de Apelaciones. Esta resolverá en cuenta, sin esperar la comparecencia de ninguna de las partes, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría del tribunal."

"Artículo 27.- El procedimiento -tratándose de las infracciones al Título IV- se sujetará a las normas establecidas en el artículo 24, con las siguientes modificaciones:

- a) *El plazo para presentar los descargos será de tres días hábiles, y*
- b) *No habrá término especial de prueba."*

SÉPTIMO: Que las disposiciones cuyo mérito constitucional se reprocha resultan fundamentales en la

resolución del caso *sub lite*. Lo anterior, habida consideración de que, precisamente, lo que se cuestiona

como contrario a la Constitución es la aplicación de los preceptos que permiten la sustanciación de la cuestión que se debate en la litis ventilada ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago;

OCTAVO: Que la impugnación se dirige a sostener la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales ya transcritos, por la vulneración eventual que su aplicación, en el caso concreto, produciría respecto de los artículos 19, número 3, y 83 de la Carta Fundamental, en la gestión judicial descrita en el considerando cuarto;

NOVENO: Que, según se ha señalado en la parte expositiva de esta sentencia, en opinión del juez que ha planteado la cuestión de constitucionalidad la aplicación de los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.733 son contrarios al artículo 19, N° 3, de la Carta Fundamental, pues según literalmente indica *"más allá de tratarse de una cuestión ajena a los artículos 55 y 400 del Código Procesal Penal y por ende, en principio, con la necesidad de participación del Ministerio Público según lo prevé el artículo 83 de la Constitución Política, que no se contempla, lo cierto es que es un procedimiento de estas características no se enmarca en las exigencias que impone la Constitución"*. Precisa que la infracción de dichas exigencias se configuraría desde el momento en que no existe un acto de imputación formal, a modo de acusación, que permita ejercer el derecho a defensa, ni un término especial de prueba para llevar adelante los descargos que deben presentarse dentro de tercero día;

DÉCIMO: Que, por su parte, el representante de CODELCO aduce esencialmente que el procedimiento

contemplado en las disposiciones impugnadas reúne los presupuestos del debido proceso, los que se encontrarían sólo constreñidos por la naturaleza de una acción que debe ser de tramitación rápida, ya que la difusión tardía de la aclaración y rectificación desvirtúa su finalidad. Agrega que, en lo que respecta al caso concreto, atendidas las probanzas rendidas, el juez ya contaría con los antecedentes suficientes para fallar si hubo o no infracción al derecho a réplica. Que, por su parte, la denunciada alegó, en la gestión pendiente, que los preceptos impugnados vulnerarían el derecho al debido proceso pues, por una parte, no contemplan las garantías para una adecuada defensa, que otorgan los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal y, por otra, tampoco reconocen la posibilidad de rendir pruebas que desacrediten el mérito de la querrela o denuncia en un tiempo razonable, impidiendo así una debida defensa;

DECIMOPRIMERO: Que de lo dicho se desprende que, en la especie, han concurrido todas las exigencias y requisitos constitucionales y legales para que este Tribunal se pronuncie sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el magistrado. Así, corresponde analizar, en esta fase, tanto los razonamientos jurídicos de las partes cuanto la veracidad de las infracciones constitucionales denunciadas respecto de los preceptos legales aplicables a la referida gestión judicial;

DUODÉCIMO: Que, previo al análisis de los reparos de constitucionalidad formulados, resulta menester referirse al sentido y alcance del derecho de aclaración y rectificación, desde el momento que las disposiciones

procesales que se impugnan se relacionan, precisamente, con la forma de ejecutar y de exigir el respeto de dicha garantía;

II. EL DERECHO DE ACLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN.

DECIMOTERCERO: Que la Constitución, en su artículo 19 N° 12, inciso tercero, establece que “toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida”;

DECIMOCUARTO: Que la doctrina (por ejemplo, Eliel C. Ballester: **Derecho de Respuesta** (Buenos Aires, Ed. Astrea, 1985, pp. 3 y ss.); Humberto Nogueira Alcalá: **El Derecho a la Libertad de Opinión e Información y sus Límites** (Santiago, Ed. Librotecnia, 2001, pp. 40 y ss.); y Néstor P. Sagüés: **Censura Judicial y Derecho de Réplica** (Buenos Aires, Ed. Astrea, 2008, pp. 95 y ss.) coincide en las notas características del derecho, indistintamente llamado de *aclaración, rectificación, respuesta o réplica*, una síntesis de las cuales se transcribe a continuación:

Primera, tal derecho es parte del proceso de comunicación, expresión o información libre en la sociedad democrática;

Segunda, es coherente con esa libertad y no representa, directa ni indirectamente, especie o forma alguna de censura, sea previa, ulterior o autocensura,

como tampoco denota una imposición ilegítima sobre el medio de comunicación social involucrado;

Tercera, implica reconocer que la libertad de expresión no es un atributo absoluto, susceptible de ser ejercido legítimamente sin límites, siendo por el contrario un rasgo esencial de la aclaración o respuesta contribuir al conocimiento de los hechos por la opinión pública, con libertad e igualdad entre quien informa, por un lado, y la persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida, de otro;

Cuarta, se halla proclamado en el artículo 19 N° 12, inciso segundo, de la Constitución y en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, preceptos que habilitan al legislador para regular su ejercicio, sin afectar la esencia del mismo, ni vulnerar el principio de igualdad ya destacado; y

Quinta, abarca las informaciones, sean éstas inexactas, agraviantes o que reúnan ambas características;

DECIMOQUINTO: Que, como ha señalado esta Magistratura, el núcleo esencial de dicho derecho fundamental consiste en que la libertad de opinión y de información se ejerza sin censura previa, resguardando de esa manera el principio de la libertad, asegurado en el artículo 1° del Código Político, el que implica, como contrapartida, el ejercicio responsable del mismo atributo esencial, rasgo de modo cuya justificación se halla en el imperativo de enfrentar los abusos (Rol N° 226/1995);

DECIMOSEXTO: Que la Ley N° 19.733, sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, en su

Título IV, se refiere a las condiciones en que debe efectuarse dicha aclaración. Así, en su artículo 18 se expresa que las aclaraciones y rectificaciones deberán circunscribirse, en todo caso, al objeto de la información que las motiva y no podrán tener una extensión, en materia de televisión, superior a dos minutos, debiendo dirigirse al director del medio de comunicación respectivo, dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de la edición o difusión que las motive. Añade el artículo 19, inciso segundo, que la aclaración o la rectificación deberá difundirse en el mismo horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado. Se puntualiza que el director del medio no podrá negarse a difundir la aclaración o rectificación, salvo que exceda los límites, ya precisados, que establece el inciso segundo del artículo 18 de la ley, o bien que tal difusión suponga la comisión de un delito (inciso cuarto). Adicionalmente, si el medio hiciera nuevos comentarios a la aclaración o rectificación, el afectado también tendrá derecho a réplica (inciso quinto). Continúa el artículo 20 aclarando que el derecho prescribirá dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de la emisión. Finalmente, el artículo 21 señala que el derecho en análisis es improcedente en relación a apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva;

DECIMOSÉPTIMO: Que la tutela y regulación legislativa de este derecho fundamental se remonta a principios del siglo XIX, en Francia. En Chile, aunque

restringida, se la denominaba libertad de prensa en el Decreto Ley N° 425, de 1925, y, por primera vez en la jerarquía de normativa constitucional, en la reforma de 1971, en términos similares, aunque no idénticos a lo dispuesto en el artículo 19 N° 12, inciso segundo, de la Carta Fundamental en vigor;

DECIMOCTAVO: Que, además de precisar que el sujeto pasivo es "algún medio de comunicación social", la actual Ley Fundamental precisa que la persona en cuestión debe haber sido "ofendida o **injustamente** aludida". Ello fue propuesto en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, a indicación del comisionado Sergio Diez, como indicativo de la falta de razón, derecho o equidad, en términos que el derecho en cuestión tendría justificación "cuando se trata de reparar el daño producido por una injusticia. Es decir, cuando no hay equidad" (sesión 236, de 22 de julio de 1976, página 28). En tal sentido, enfatizó que, de aceptarse sin ese calificativo, podía perturbarse el funcionamiento normal de los medios de comunicación social. En el mismo sentido, el comisionado Jaime Guzmán había señalado la necesidad de que la alusión fuera infundada, de modo de no entorpecer la acción periodística más allá de lo conveniente y salvaguardando debidamente los derechos de los afectados, concluyendo que el derecho significa "que el medio califica, evidentemente si considera que la alusión fue fundada o infundada, siempre y cuando no sean ellas ofensivas, porque si fue ofensiva, está obligado a conceder la réplica". Ahora bien, "si en el hecho el medio niega en cualquier caso el derecho a réplica, en definitiva, los tribunales son los que tienen que

discernir si hubo o no ofensa, o si la alusión fue o no fundada" (ibid.). Por lo mismo se ha señalado que al agregarse dicho calificativo, el derecho de réplica queda reducido a aquellas alusiones "contrarias a la razón, a la equidad o a la justicia, para facilitar el funcionamiento de los medios de comunicación social y evitar el abuso de la facultad reconocida" (José Luis Cea Egaña, Tratado de la Constitución de 1980, Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1988, p. 100);

DECIMONOVENO: Que se trata de un derecho que se vincula no sólo al honor y la honra de la persona sino que también se relaciona con la veracidad de la información. Por lo mismo, en cuanto a su alcance, el Tribunal Constitucional español, en sentencia fechada el 22 de diciembre de 1986, concluyó que "el derecho de rectificación así entendido, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos aludidos, supone un complemento a la garantía de la opinión pública que establece también el citado precepto constitucional, ya que el acceso a una versión diferente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo de la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege". La Corte Suprema, en causa rol N° 1290-1999, precisó que "el contenido del deber de aclarar o rectificar una noticia que constituya ofensa o injusta alusión es moral, y en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales suscritos por nuestro país que se encuentran en vigencia y en la legislación interna ha sido reconocido como una obligación jurídica de todo medio de comunicación social,

como una especial forma de protección frente a ataques a la honra, reputación y vida privada de las personas;

VIGÉSIMO: En la doctrina comparada, Héctor Gross Spiell ha sostenido que el derecho de rectificación o respuesta permite “el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática” (**La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo** (Santiago, Ed. Jurídica de Chile, 1991);

VIGESIMOPRIMERO: Que, coincidente con lo expuesto, en el Mensaje de la Ley sobre Libertad de Opinión e Información se deja constancia que, “con el fin de cautelar la veracidad de la información difundida a través de los medios de comunicación social, ha establecido el derecho de aclaración y rectificación, en beneficio de toda persona, natural o jurídica, ofendida o injustamente aludida”. En la discusión de aquella normativa también consta que “este derecho es esencial para la protección del honor y buen nombre de las personas cuando ellas estimen que una información difundida les afecta o no se ajusta a la verdad o les causa descrédito”. Así, “la modalidad particular que el proyecto de ley contempla para responder por los abusos es a través del ejercicio del derecho de aclaración y de rectificación”;

VIGESIMOSEGUNDO: Que, en cuanto a su alcance, la jurisprudencia ha señalado que el derecho a rectificar “implica la posibilidad de modificar, de alterar lo dicho, de sustituir lo que se hubiere señalado

incorrectamente". Así, se reconoce tal derecho "para que aquella información injusta u ofensiva sea reemplazada por la que se adecua a la realidad o, al menos, para que puedan ser confrontadas las diferentes versiones" (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 69076-1998);

VIGESIMOTERCERO: Que la doctrina ha conceptualizado este derecho como "una garantía del ciudadano afectado por una información inexacta que le facilita el acceso al medio de comunicación en el que aquélla se difundió, de manera sencilla y rápida, condición esta última imprescindible para la efectividad del derecho, pues es claro que el transcurso del tiempo opera negativamente sobre los intereses de su titular" (Porfirio Barroso y María del Mar López Talavera: **La libertad de expresión y sus limitaciones constitucionales** (Madrid, Ed. Fragua, 1998, p. 226). En nuestro país, Humberto Nogueira Alcalá ha señalado que se trata de "un derecho fundamental y una acción que tiene toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social por alguna información desarrollada en él, a demandar que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en forma análoga por dicho medio de comunicación social, en las condiciones que determine la ley, pudiendo accionar judicialmente para ello, con el objeto de prevenir o evitar un perjuicio que una información considerada inexacta, agravante u ofensiva pueda irrogarle a su honra, vida privada u otro derecho o interés legítimo" (Op. cit., p. 98);

VIGESIMOCUARTO: Que de lo señalado se desprende que el derecho de aclaración o rectificación surge cuando la persona ofendida o aludida injustamente afirma que la

información es inexacta, razón por la cual solicita que el medio de comunicación social dé a conocer su declaración, abriendo en caso contrario la posibilidad de que se ejerza una acción judicial para dirimir la materia, proceso que precisamente motiva el presente requerimiento;

VIGESIMOQUINTO: Que tanto la Constitución como la Ley sobre Libertad de Opinión e Información aseguran el referido derecho de aclaración o rectificación;

III. IMPUGNACIONES AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

VIGESIMOSEXTO: Que, como se ha señalado, se impugna por parte del juez que ha planteado la cuestión el procedimiento judicial establecido en materia de infracción al derecho referido, lo que se regula en los artículos 26 a 28 de la Ley sobre Libertad de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, N° 19.733;

VIGESIMOSÉPTIMO: Que el conocimiento y resolución de las denuncias o querellas por infracción a tales normas regulatorias corresponde al tribunal con competencia en lo criminal del domicilio del medio de comunicación social respectivo, según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 19.733, precepto que fue estimado como propio de ley orgánica constitucional y conforme a la Carta Fundamental por esta Magistratura (Rol N° 324/2001);

VIGESIMOCTAVO: Que el artículo 27 de la Ley 19.733 establece que el procedimiento se sujetará a las normas establecidas en el artículo 24, con algunas

modificaciones, relativas al plazo para presentar los descargos y a la circunstancia de que no se prevé un término especial de prueba. Así, de la lectura de ambas disposiciones impugnadas se desprende que las reglas serán las siguientes: a) la denuncia debe señalar claramente la infracción cometida, los hechos que la configuran y adjuntar los medios de prueba que los acrediten; b) se notificará de la demanda por cédula, a través de notario o receptor judicial, al director del medio de comunicación o a la persona que legalmente lo reemplace, en su domicilio legal; c) el denunciado debe presentar sus descargos dentro de tres días hábiles, adjuntando los medios de prueba que acrediten los hechos en que los funda, no existiendo posibilidad de un término especial de prueba; d) la sentencia se dictará dentro de tercer día; e) las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el estado diario; y f) la sentencia definitiva será apelable en ambos efectos, dentro del plazo de cinco días, resolviendo la Corte de Apelaciones en cuenta, dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha de ingreso del expediente a la secretaría;

VIGESIMONOVENO: Que en el texto primitivo del correspondiente proyecto de ley sólo se aludía al “reclamo por no haberse hecho oportunamente la publicación o por haberse hecho infringiendo los artículos anteriores”. En la tramitación de la ley, se propuso por el senador Larraín reemplazar el término “denuncias” por la frase “acciones civiles o criminales”. A su vez, a indicación de los senadores Feliú, Diez y

Piñera, se propuso agregar al concepto de “denuncias” el de “querellas”;

TRIGÉSIMO: Que, como puede verse, para poder resolver la controversia planteada, es menester referirse a las modificaciones que sufrió la norma en examen durante la discusión parlamentaria y que explican la naturaleza jurídica del procedimiento infraccional. En tal sentido, cabe señalar que en el Mensaje se proponía, en relación a los medios de prueba, que “el reclamo por no haberse hecho oportunamente la publicación o por haberse hecho infringiendo los artículos anteriores deberá hacerse al juzgado del crimen que corresponda, acompañado de los medios de prueba que acrediten la entrega de la aclaración o rectificación, del ejemplar que motivó ésta y de aquel en que ella debió aparecer”. En cuanto al procedimiento se precisaba que “el tribunal concederá a los emplazados tres días para responder y, vencido este término, hayan o no contestado, resolverá sin más trámite, tomando en consideración la circunstancia de que el reclamante haya sido realmente ofendido o injustamente aludido y el antecedente de que su aclaración o rectificación satisfaga los requisitos establecidos (...) y no suponga la comisión de algún delito”. En el primer informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se propuso que “la reclamación por las infracciones de los artículos anteriores deberá hacerse al juez del crimen competente, acompañada de los medios de prueba que le sirven de fundamento” y, en cuanto a la tramitación, se indicaba que “el tribunal concederá a los emplazados tres días para responder. Vencido este término, hayan o no

contestado, resolverá sin más trámite y en forma fundada”;

TRIGESIMOPRIMERO: Que, en atención a que la Comisión aludida acogió cierta observación de la Corte Suprema en orden a otorgar competencia al juez en lo civil para conocer de las infracciones a las disposiciones sobre “formalidades de funcionamiento de los medios de comunicación social”, decidió también regular el procedimiento para este tipo de infracciones, tal como se encuentra normado en el artículo 24 de la Ley vigente. Además, se acordó hacer aplicable el mismo procedimiento a las infracciones relativas al derecho de aclaración y rectificación pero, en atención a la naturaleza de la infracción, estableció las dos variantes que aparecen en el artículo 27 impugnado, esto es, que el plazo para contestar sólo es de tres días y que no existirá término especial de prueba. En efecto, se dejó constancia que, *“en lo que concierne a las materias de orden procesal, se mantuvo la actual competencia del juez de letras en lo criminal, y se prefirió hacer aplicable el mismo procedimiento ya aprobado para conocer y fallar las infracciones al título III de la ley, con sólo dos excepciones, derivadas de la diferente naturaleza de la infracción: la reducción del plazo para presentar los descargos y la omisión del término probatorio. De esta forma, la Comisión decidió consultar tres artículos. El primero declara la competencia del juez del crimen para el conocimiento de estas materias; el segundo, da normas sobre procedimiento, y, finalmente, el tercero contempla las sanciones aplicables”;*

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, en el segundo trámite constitucional, tal como consta en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la mayoría de los integrantes de

la misma:

“fueron de parecer de que la tipificación penal de estas conductas podría significar una seria limitación para el ejercicio de las libertades de opinión y de información; que el mecanismo idóneo para dar protección a los bienes jurídicos de que se trata es, en el ámbito penal, los delitos de injuria y de calumnia que ya contempla nuestro ordenamiento, y, en el ámbito civil, además de las acciones indemnizatorias a que dan lugar esos delitos, la aclaración o rectificación que también prevé la Constitución Política; y, por último, que debía revisarse el criterio del constituyente de prever el castigo de estas conductas como delito por parte del legislador”;

TRIGESIMOTERCERO: Que, del mismo modo, en concordancia con lo anterior, cabe tener presente que la disposición legal que se impugna encuentra su antecedente histórico en la antigua Ley N° 16.643, sobre abusos de publicidad, que otorgaba competencia al juez del crimen para conocer de estas materias, quien debía resolver en un procedimiento breve, en el que sólo se concedía tres días al director del medio para responder de la petición. Adicionalmente, el director que desobedeciere la orden judicial de publicar la respuesta podía ser sancionado, además de una multa, como autor del delito de desacato. Esta redacción, que se mantuvo en la primera etapa del nuevo proyecto de ley, fue sustituida en el segundo trámite en el Senado, dejándose constancia de las siguientes consideraciones para no penalizar dicha conducta:

“Uno de los aspectos en que centró su análisis la Comisión fue el relativo a las sanciones que se contemplan para el caso de que el director del medio no cumpla la obligación de publicar o emitir la aclaración o rectificación.

Sobre el particular, estimó primeramente la Comisión que era conveniente que el tribunal fijase un plazo dentro del cual deberá realizarse esa actuación, sin perjuicio de mantener la posibilidad de aplicar una multa al director, en caso de que su negativa frente al requerimiento del interesado haya sido injustificada.

Luego de ponderar las medidas a aplicar para el caso de que, vencido el plazo concedido por el tribunal, tampoco se difunda la aclaración, se convino en que, desde el punto de vista de instar por el cumplimiento efectivo de la orden judicial -y satisfacer con ello el propósito de fondo de que se difunda la aclaración o rectificación-, es suficiente que se aplique una multa más elevada que la que se puede imponer por la simple negativa a aceptar el requerimiento del interesado, y la suspensión inmediata del medio de comunicación social, la que se levantará desde el momento en que se cumpla con esta obligación en forma cabal”;

TRIGESIMOCUARTO: Que, como se señaló en la discusión de la normativa legal, por parte del Ministro Secretario General de Gobierno, “los abusos que se cometen en los medios de comunicación social en ejercicio de las referidas libertades, y que no significan delitos, son corregidos a través del mecanismo de la aclaración y de la rectificación”. En el mismo sentido, los senadores Fernández y Hamilton hicieron presente que el criterio de la Comisión de Constitución fue que, “sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil proveniente de la perpetración de delitos, los posibles abusos en que se pudiera incurrir serían corregidos mediante el ejercicio del derecho de aclaración y de rectificación”;

TRIGESIMOQUINTO: Que, en atención a la naturaleza del asunto, es claro que se trata de un procedimiento judicial que debe armonizar los bienes jurídicos en pugna. Así, como se señalara por uno de los legisladores, “si alguien se siente injustamente aludido u ofendido por un medio de comunicación social, tiene derecho a demandar de éste una aclaración o rectificación gratuita. Esta situación se halla debidamente reglada -en la forma en que la acabamos de

aprobar- y, en caso de negativa del medio, se establece un procedimiento judicial breve y expedito para que el juez resuelva la controversia" (senador Hamilton). Ciertamente, el procedimiento no tiene el carácter de penal, sino de tipo infraccional - como por lo demás lo indica el propio título del párrafo segundo del título quinto-, pero él también debe guardar armonía con los principios de un debido proceso, como lo ha señalado reiteradamente esta Magistratura (Rol N° 244/1996 y, más recientemente, en los autos Rol N° 480/2006). Por lo mismo, no resulta aplicable en la especie el artículo 83 de la Constitución, relativo a la participación del Ministerio Público, desde el momento que tampoco se trata de una investigación de carácter propiamente penal. El legislador, dentro del ámbito de su autonomía, como lo ha señalado esta misma Magistratura (Rol 616/2007), ha determinado que, por la naturaleza del asunto, ello sea conocido por un juez de garantía;

TRIGESIMOSEXTO: Que la Constitución, en su artículo 19 N° 3, inciso quinto, establece que "corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos". Sobre el alcance de dicha garantía, esta Magistratura ha señalado que entre las bases del debido proceso "se cita generalmente el principio de contradicción o bilateralidad de la audiencia, comprensivo del conocimiento oportuno de la acción, el derecho a formular las defensas y de rendir y controvertir las pruebas" (Rol N° 1202/2009). Ahora bien, "el derecho a la prueba es eventual y dependerá de las circunstancias del caso y de la pertinencia de la misma" (Roles N° 481/2006 y

596/2006), de modo que “la necesidad de producir prueba, como requisito de una decisión antecedida de un proceso racional y justo dependerá de las contingencias del caso” (Rol N° 806/2007);

TRIGESIMOSEPTIMO: Que, en el caso del precepto legal que se cuestiona, las características de este procedimiento hacen necesario que se resuelva la petición con premura dados los bienes jurídicos en juego, sin que se lesionen las reglas de un justo y racional procedimiento. En efecto, se trata de un procedimiento concentrado, conforme al cual los descargos deben presentarse dentro de tercero día hábil, adjuntando los medios de prueba que se harán valer para fundamentar su defensa, no existiendo término especial probatorio;

TRIGESIMOCTAVO: Que el término especial de prueba, conforme lo establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, es aquel que se fija en caso que existan entorpecimientos que imposibiliten la recepción de la prueba. Del mismo modo procede que lo determine el tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 340 de aquel Código, si la prueba testimonial se ha comenzado a rendir en tiempo hábil y no se concluye en él por impedimento cuya remoción no haya dependido de la parte interesada. En el caso de autos, nada obsta, sin embargo, a que si la denunciada carece de los medios de prueba, se exprese esta circunstancia y que el tribunal fije una audiencia para recibir la evidencia ofrecida y no acompañada. Lo único que no autoriza la norma es a que se continúe en una audiencia posterior con la rendición de la prueba, dado que se persigue concentrar la diligencia en un solo acto;

TRIGESIMONOVENO: Que, como puede advertirse, el procedimiento contencioso establecido por la ley para el ejercicio del derecho de aclaración y rectificación contiene plazos breves, destinados a garantizar la celeridad del proceso, en atención a los bienes jurídicos en conflicto, pero preservando las garantías propias del proceso justo o debido. Efectivamente, la denunciada debe ser emplazada adecuadamente, teniendo oportunidad de aportar prueba en su defensa -en un plazo adecuado en consideración a la naturaleza del conflicto- y de impugnar, en su caso, lo resuelto ante el tribunal superior jerárquico. Ello ha llevado a un autor a señalar que las normas en cuestión, evaluadas en abstracto, "respetan el derecho a la jurisdicción, el derecho de defensa, la igualdad de armas procesales y de presentación de prueba, como asimismo se establecen plazos razonables y proporcionales a la naturaleza de la acción judicial" (Humberto Nogueira Alcalá, El derecho de declaración, aclaración o de rectificación en el ordenamiento jurídico nacional", **Revista Ius et Praxis**, 2001, p. 351);

CUADRAGESIMO: Que, en suma, de lo señalado se desprende que las normas de procedimiento, establecidas en la Ley N° 19.733 para el ejercicio del derecho de aclaración y de rectificación, atendida la naturaleza infraccional del asunto, aplicadas al caso concreto que motiva la cuestión de constitucionalidad planteada, resguardan adecuadamente las garantías de un debido proceso, pues permiten a la afectada hacer valer sus alegaciones y aportar la prueba necesaria, en concordancia con lo que establece el artículo 19 n° 3,

inciso quinto, de la Constitución, teniendo presente que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 83 de la Carta Política, en cuanto a la participación del Ministerio Público, en atención a que tampoco se trata de un procedimiento de carácter penal, sino infraccional sancionatorio.

Y VISTO: lo prescrito en los artículos 19, N° 3, 83, 93, inciso primero, N° 6, e inciso decimoprimer, de la Constitución Política de la República y en las disposiciones pertinentes de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional,

SE DECLARA: Que se rechaza la presentación formulada a fojas 1. Déjase sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en autos, oficiándose al efecto al tribunal respectivo.

Acordada con el voto en contra del Presidente del Tribunal, Ministro don Juan Colombo Campbell, quien fue de opinión de acoger el presente recurso en atención a las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- Que el artículo 1° del Código Penal define el delito como "toda acción u omisión voluntaria penada por la ley". De conformidad al artículo 3° del mismo cuerpo legal, "Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada". Así, resulta evidente que esta figura admite rangos, dentro de los cuales se encuentran las faltas que, de manera categórica e inequívoca, se incluyen en un precepto legal vigente, que no ha sido impugnado de inconstitucionalidad en esta

causa. Así, el delito, en sentido genérico, se encuentra clasificado y, generalmente, cuando la pena que se le ha asignado al autor del mismo es una multa, se tipifica como "falta". Ello conduce a concluir inequívocamente que toda falta queda incluida dentro del concepto de delito del artículo 1° del Código Penal.

SEGUNDO.- Que la Ley N° 19.733 tipifica como ilícito penal la conducta contenida en su artículo 19, somete su tramitación al artículo 24 de la ley citada y le otorga competencia absoluta para conocerlo al tribunal del crimen y competencia relativa al del domicilio del medio de comunicación social.

En mérito de lo expuesto, para la acertada resolución de la materia sub lite deben considerarse los siguientes antecedentes:

- a) El denunciante, en este caso, es la Corporación Nacional del Cobre;
- b) El denunciado, Chilevisión S.A., representado por su Director Ejecutivo, Jaime de Aguirre;
- c) El hecho denunciado se encuentra tipificado y descrito en el artículo 28 del citado cuerpo legal, en concordancia con su artículo 19, en términos que se sanciona el incumplimiento de las normas sobre el derecho a aclaración y rectificación contempladas en el título IV de la ya citada ley, falta que se verifica mediante dos actos: primero, mediante la omisión de la obligación del medio de comunicación de realizar y difundir gratuitamente la aclaración o rectificación con las formas y oportunidad contempladas por el título IV de la ley, en los

mismos términos, horarios y condiciones de la información que se requiere aclarar o rectificar y, segundo, mediante una aclaración o rectificación ya realizada que, al no cumplir con dichas exigencias, resulta incompleta o insuficiente a juicio de su titular. La propia ley, en su artículo 17, y como medida cautelar probatoria de orden penal, faculta a requerir al juez con competencia en lo criminal el envío de una copia de lo difundido, la que deberá ser enviada dentro de tercero día de notificada dicha resolución.

- d) El juez competente para conocer y resolver las infracciones al título IV de la Ley N° 19.733, que según la misma es aquel dotado de competencia en lo criminal en el territorio correspondiente al domicilio del medio de comunicación social. Actualmente tiene ese carácter el juez de garantía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales.
- e) El procedimiento está regulado por el artículo 27, que se remite al artículo 24 del mismo cuerpo legal.
- f) En el caso sub lite, como lo hace ver el juez requirente, no intervino el Ministerio Público, lo que implicaría una infracción al artículo 83 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 388 y siguientes del Código Procesal Penal.

TERCERO.- Que existe una relación de género a especie entre el concepto de delito en sentido amplio y las clases que el mismo contiene, consistentes en crímenes,

simples delitos y faltas, todos encuadrados en el artículo 1º del Código Penal. Es por lo anterior que, aun cuando las faltas tengan un procedimiento diferente, constituyen figuras delictivas, por lo que requieren necesariamente de una investigación y un proceso penal regido por lo dispuesto en los artículos 19, numeral 3º, y 83 de la Constitución, en cuanto a las exigencias constitucionales para que el proceso y la investigación que se inicien para su resolución resulten racionales y justos.

CUARTO.- Que, como reiteradamente lo ha declarado este Tribunal, el constituyente se abstuvo de enunciar, en el texto de la Constitución, las garantías del procedimiento racional y justo, reenviando al legislador la atribución de precisarlas en cada caso. En este orden de ideas, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (sesiones 101 y 103) discutió extensamente esta materia, prefiriendo no enumerar los requisitos del debido proceso, sino atribuir a la ley el deber de establecer las garantías de un racional y justo procedimiento, dejándose constancia que tales atributos se concretan, entre otros elementos, en principios como el de la igualdad de las partes y el emplazamiento, materializados en el conocimiento oportuno de la acción, la posibilidad de una adecuada defensa y la aportación de la prueba, cuando ella procede. En este mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en sus sentencias Roles números 376, 389, 478, 481, 529, 533, 596, entre otras, en sintonía con la Corte Suprema, estableciendo ésta (C.S., 5 diciembre 2001, R.G.J., 258)

que *"conforme a la doctrina nacional, el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores..."*.

QUINTO.- Que, por otro lado, siguiendo la doctrina fijada en la sentencia rol N° 815, cabe tener presente que uno de los grandes valores que la Constitución consagra es el acceso al proceso, *lato sensu*, al expresar en su artículo 19, numeral 3°, que asegura la igualdad en el ejercicio de los derechos y que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos.

SEXTO.- Que, en este orden de regulaciones procesales, la Carta establece al Ministerio Público como el receptor natural de la noticia de la comisión del hecho punible, que, en consecuencia, en esta fase primaria de la investigación, es el destinatario de la denuncia por la cual se solicita investigar y posteriormente traspasar el conflicto al órgano jurisdiccional cuando corresponda, en

tanto es el órgano encargado, de manera exclusiva, de la investigación de los hechos que revistan caracteres de delito, en virtud del claro y específico tenor del actual artículo 83 de la Carta Fundamental, introducido por la reforma constitucional de la Ley N° 19.519, del año 1997, por medio de la cual la investigación penal fue extraída de la competencia de los tribunales y su dirección y ejercicio fueron entregados por la Carta Básica a los fiscales, como representantes de un organismo autónomo y técnico que se denominó Ministerio Público.

En este entorno, el ejercicio de la acción penal, forma ordinaria de impulsar la apertura y formación del proceso, continúa siendo el presupuesto primario de su iniciación y, como tal, la primera fase, investigativa, para que éste se tramite legalmente, como lo exige la Constitución, corresponde por mandato de ella al Ministerio Público, no encontrándose habilitación alguna al legislador para establecer limitaciones a dicha disposición.

SEPTIMO.- Que el legislador, en el marco de su autonomía, tipificó como falta las infracciones al Título IV de la Ley N° 19.733, cuestión que no cabe ser examinada por esta Magistratura. No obstante ello, sí corresponde a este Tribunal decidir si los preceptos impugnados, en tanto se refieren a la tramitación de un proceso destinado a resolver un conflicto de relevancia jurídica, resultan o no constitucionales en función de la preceptiva de la Carta Fundamental conducente a la tutela judicial efectiva.

OCTAVO.- Que de todo lo razonado precedentemente y del examen de los preceptos impugnados, puestos en aplicación al caso concreto, cabe resaltar que en los mismos no se contempla la intervención del Ministerio Público en la investigación de los hechos, como correspondería según el artículo 83 de la Carta Fundamental, lo que resulta aún más notorio en la medida que los preceptos impugnados hacen aplicable a asuntos penales el procedimiento ante los tribunales de competencia civil contemplado en el artículo 24 de la Ley N° 19.733, sólo con dos modificaciones, lo que se traduce en que, puestos en aplicación, generan como efecto una lesión al derecho a la investigación y al proceso racionales y justos y por otra parte hacen nacer la posibilidad de imponer penas a medios de comunicación social, esenciales para la pervivencia del régimen democrático, sin una etapa investigativa por parte del Ministerio Público como la Constitución lo exige y sin un procedimiento idóneo para asuntos de naturaleza penal, estableciendo así un régimen de desigualdad ante el órgano jurisdiccional e infringiendo los artículos 19, numeral 3°, y 83 de la Constitución, lo que redundaría en una desigualdad ante la ley entre denunciado y denunciante, que carece de fundamento suficiente.

NOVENO.- Que, por todo lo anterior, este disidente estuvo por declarar inaplicables por inconstitucionales los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.733, impugnados en el

requerimiento de este proceso.

Redactaron la sentencia los Ministros señores José Luis Cea Egaña y Enrique Navarro Beltrán y la disidencia su autor.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Ro1 N° 1.247-08-INA.

Se certifica que el Ministro señor Jorge Correa Sutil concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por haber cesado en sus cargos.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por los Ministros señores Juan Colombo Campbell (Presidente), José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.